



DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN

SALA MIXTA DE DECISIÓN

Medellín, lunes, cuatro de octubre de dos mil veintiuno
Acta número 0097

Magistrado Ponente
Dr. Ricardo De La Pava Marulanda

Procede la Sala a resolver sobre el **CONFLICTO DE COMPETENCIA** incoado por la Sala Laboral de esta Corporación, en relación con el proceso ejecutivo que fuera presentado por el doctor FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA en contra de ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A.-ESIMED S.A.

HECHOS Y ACTUACIONES

1. De la demanda y su fundamento

Solicitó el doctor FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA que se librara mandamiento de pago en contra de ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A.- ESIMED S.A. por los valores contenidos en las facturas N° 5697, 5698, 5699, 5702, 5703, 5704, 5708, 5709, 5710, 5712, 5713, 5714, 5718, 5719, 5720, 5724, 5726, 5732, 5733, 5735, 5745, 5746, 5747, 5749 y 5750, más los intereses de mora que se causaron y se causaren sobre las sumas de capital contenidas en estas.

La demanda inicialmente fue repartida a los Juzgados Civiles del Circuito de Medellín correspondiéndole al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, quien mediante auto del 29 de septiembre de 2020 consideró que no era competente y la rechazó de plano y ordenó remitirla a la Oficina Judicial para que fuese asignado a los Jueces Laborales del Circuito de la municipalidad.

Una vez repartido el proceso ejecutivo al Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 27 de enero de 2021 negó librar mandamiento de pago al considerar que las facturas aportadas no cumplían los requisitos de Ley, indicando que debía iniciarse un proceso ordinario laboral para la declaratoria del derecho, decisión contra la que el apoderado del accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando sus motivos de inconformidad.

2. Argumentos del funcionario en conflicto

Frente al recurso de apelación formulado por el doctor FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA, la Sala Segunda de Decisión Laboral de esta Corporación mediante auto del 26 de julio de 2021, luego de indicar que la normatividad era clara en señalar que las controversias jurídicas para que sean conocidas por el Juez laboral deben darse entre dos partes, respecto a las facturas, citando jurisprudencia, concluyó que así se tratara de un proceso ejecutivo u ordinario era la jurisdicción Civil quien debía conocer de la pretensión instaurada, por lo que el a quo no debió resolver la solicitud de mandamiento de pago al no ser competente.

Finalmente indicó, que para la Sala era claro que no era procedente conocer del recurso de alzada contra el auto que resolvió la solicitud de librar mandamiento de pago por no ser competente, absteniéndose de conocer de fondo y suscitando el conflicto negativo de competencia, para que fuera resuelto por la Sala Mixta de la misma Corporación.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Sea lo primero advertir que la Colegiatura es competente, a través de esta Sala Mixta, para desatar el conflicto trabado entre dos Jueces de diferente especialidad del mismo Distrito Judicial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia - Ley 270 de 1996 – y el artículo 139 del Código General del Proceso.

Como quiera que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín y la Sala Laboral de esta Corporación argumentaron no ser los competentes para impulsar la actuación referida, deberá la Sala entrar a resolver el asunto, siendo preciso señalar desde ya, que al analizar los argumentos expuestos por los respectivos funcionarios, las pretensiones de la demanda ejecutiva y todo lo obrante en el plenario, el funcionario competente para conocer del proceso ejecutivo formulado por FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA, es la Juez Tercero Civil de Circuito de Oralidad de Medellín.

Atendiendo a las circunstancias que dan origen al conflicto, inicialmente debemos acudir al artículo 2 del Código de Procedimiento laboral, específicamente en sus numerales 4 y 5, que señalan:

"...4. Modificado por del artículo 622 del Código General del Proceso. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.

5. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad..."

Con base en dichos preceptos, la jurisprudencia había seguido una misma línea indicando que la competencia del juez laboral no solo estaba limitada a la relación de trabajo en estricto sentido, ya que también debían conocer aquellas controversias y obligaciones originadas en el Sistema de Seguridad Social Integral tal y como lo dispone el numeral 5, así provengan de contratos entre las sociedades pertenecientes al sistema (EPS, IPS o ARL) sin

importar los medios que se otorguen para garantizar el cumplimiento de la obligación; al respecto señaló la Alta Corporación de la Jurisdicción Ordinaria:

*"Al efecto, debe precisar inicialmente la Corporación que en este caso el Instituto Nacional de Cancerología pretendía que se librara mandamiento de pago contra la Cooperativa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral COOSALUD, con fundamento en las facturas de venta, relaciones de cobro y demás documentos que acompañó al libelo, expedidos por los servicios de salud que a los afiliados de esta última prestó bajo el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social Integral. En consecuencia, la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral, de conformidad con el numeral 5º del artículo 2º del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (modificado por el artículo 2º de la Ley 712 de 2001), pues sin lugar a dudas la demanda procura la ejecución de obligaciones del aludido sistema. Dicho precepto, se advierte, no fue modificado por la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso)."*¹

Sin embargo, esta postura ha sido revaluada en Sala Plena de la Jurisdicción Ordinaria, pues bajo un nuevo análisis, la Alta Corporación señaló que existen casos en los cuales a pesar que el conflicto se dé entre entidades de la seguridad social, la competencia radica en los jueces civiles, al respecto se indicó:

"Es cierto que uno de los principales logros de la Ley 100 de 1993 fue el de unificar en un solo estatuto el sistema de seguridad social integral, al tiempo que la Ley 712 de 2001 le asignó a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, el conocimiento de las controversias surgidas en razón del funcionamiento de tal sistema, como así lo prevé el artículo 2º, numeral 4º, ...

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Auto del 20 de marzo de 2014, APL1428-2014. MP. Luis Guillermo Salazar Otero.

... Ocurre sin embargo que dicho sistema puede dar lugar a varios tipos de relaciones jurídicas, autónomas e independientes, aunque conectadas entre sí.

La primera, estrictamente de seguridad social, entre los afiliados o beneficiarios del sistema y las entidades administradoras o prestadoras (EPS, IPS, ARL), en lo que tiene que ver con la asistencia y atención en salud que aquellos requieran.

La segunda, de raigambre netamente civil o comercial, producto de la forma contractual o extracontractual como dichas entidades se obligan a prestar el servicio a los afiliados o beneficiarios del sistema, en virtud de lo cual se utilizan instrumentos garantes de la satisfacción de esas obligaciones, tales como facturas o cualquier otro título valor de contenido crediticio, el cual valdrá como pago de aquellas en orden a lo dispuesto en el artículo 882 del Código de Comercio.

Así las cosas, es evidente que como la obligación cuyo cumplimiento aquí se demanda corresponde a este último tipo de relación, pues surgió entre la Entidad Promotora de Salud Cafesalud S.A., y la Prestadora del servicio Hospital Universitario de Bucaramanga, la cual se garantizó con un título valor (factura), de contenido eminentemente comercial, la competencia para conocer de la demanda ejecutiva, teniendo en cuenta las No. 110010230000201600178-00 6 consideraciones precedentes, radica en la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil”².

Ahora bien, se tiene que la demanda fue presentada ante los Juzgados Civiles con el fin que admitiera y como consecuencia librara el mandamiento de pago a favor de FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA, lo cual fue remitido por la Juez Tercera Civil del Circuito a los Jueces Laborales al considerar que no era competente, siendo repartida al Juzgado Noveno Laboral del Circuito quien negó admitirla, decisión contra la que se formuló recurso de apelación siendo remitido al superior, sin embargo, en cumplimiento a los deberes que le asiste como juez, ejerciendo un

² Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Auto del 23 de marzo de 2017, APL2642-2017. MP. Patricia Salazar Cuellar.

control de legalidad de su actuación, el Magistrado Ponente se percató de su incompetencia y dispuso la remisión del proceso a la Sala Mixta para que definiera la competencia sobre el asunto.

En ese sentido, no se configuró la Litis en sentido propio, ya que el Juez Laboral no libró mandamiento de pago, es decir, no se estructuró la relación jurídico procesal entre demandante y demandado; y en el caso hipotético de haber ocurrido, el ejecutado por vía de excepción podría alegar la falta de jurisdicción o competencia, y de prosperar, las actuaciones se remitirían al competente como lo ordena el numeral segundo del artículo 101 del Código General del Proceso, situación que permite concluir que no se presenta el fenómeno de la prórroga de la competencia, resultando desacertada, por otro lado, la decisión de la Juez Civil de desprenderse de la competencia, que desde el principio se direccionó correctamente.

Por ello, la controversia que provocó el conflicto planteado, ineludiblemente le corresponde a la jurisdicción ordinaria en la especialidad civil.


Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA DE DECISIÓN MIXTA,**

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR COMPETENTE para conocer del proceso ejecutivo singular formulado por FRANCISCO JAVIER VÉLEZ LARA en contra de ESTUDIOS E INVERSIONES MÉDICAS S.A.-ESIMED, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Oralidad de Medellín.

SEGUNDO: REMITIR el expediente al referido Despacho e informar de esta decisión a la Sala Segunda de Decisión Laboral de esta Corporación y al demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



RICARDO DE LA PAVA MARULANDA

Magistrado



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

Magistrada



GLORIA MONTOYA ECHEVERRI

Magistrada